

Calviño frena la subida de impuestos en plena ofensiva de los empresarios

► La CEOE trasladada al Gobierno que el alza de tributos que defiende Montero dañaría la recuperación y el empleo

► Ábalos, en línea con la vicepresidenta, se ha mostrado sensible, en privado, con las quejas de la patronal

MARÍA CUESTA/SUSANA ALCELAY
MADRID

Mientras el Gobierno decide si sube o no los impuestos este año, la incertidumbre se expande como una mancha de fuel por un ecosistema empresarial muy castigado tras más de un año de dura crisis. «Se suban o no, buena parte del daño ya está hecho», se lamentaba ayer el alto directivo de una empresa. La chispa saltaba el pasado martes, con las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que abogaba por armonizar cuanto antes Sucesiones y Donaciones, Patrimonio y endurecer Sociedades, lo que elevaría los tributos en regiones con impuestos reducidos como Madrid y los bajaría en otros regiones con alta presión fiscal.

Y en el carrusel en el que está instalado el Gobierno de desmentidos, rectificaciones y afirmaciones contradictorias, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, trataba ayer de apagar el incendio negando la mayor y asegurando que «no es momento de subir impuestos». «De ninguna manera estamos hablando de subir impuestos y menos a corto plazo», recaló la vicepresidenta. «Tenemos que modernizar nuestro sistema fiscal, hacerlo más sólido y progresivo, ver qué oportunidades da la fiscalidad verde... y para ello se ha creado un grupo de expertos que presentarán sus conclusiones en 2022», añadió Calviño en una entrevista en la radio.

Entre las declaraciones de una y otra ministra se cuentan varias llamadas de altos empresarios a ministros económicos del ala socialista del Gobierno de coalición. La propia Calviño mantiene una relación fluida con el líder de los empresarios, Antonio Garamendi. Fuentes cercanas a la CEOE aseguran que la organización estudia la posibilidad de alzar la voz en contra de esta subida coincidiendo con su junta directiva de la próxima semana. También el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, habría recogido las demandas de varios empresarios de su ramo y, según las fuentes consultadas, habría mostrado su sensibilidad ante la preocupación.

Los sindicatos no se han pronunciado en esta ocasión sobre el alza de impuestos que defiende la titular de Hacienda, aunque su postura ha sido siempre muy clara. Para UGT y CC.OO. el aumento de la contribución fiscal

«es pieza clave para garantizar los derechos sociales, así como para impulsar la actividad económica, la inversión y transformar el tejido productivo», según la propuesta sindical para «la construcción de un nuevo país, con futuro, más social, más igualitario, más productivo y más verde», que presentaron el pasado verano los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.

En Madrid, donde la fiscalidad se ha convertido en un arma arrojadiza con vistas a las elecciones, la preocupación es máxima. El presidente de CEIM, Miguel Garrido, considera que los cambios de opinión se deben a las grietas dentro de la coalición. «La fiscalidad aplicada en la Comunidad de Madrid a los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones es la más parecida a la vigente en casi todos los países de la Unión Europea. Solo desde planteamientos ideológicos o por atender las exigencias de los socios independentistas y populistas del Gobierno se explica que se pretenda imponer una subida de impuestos que va a perjudicar tanto a la competitividad de nuestras empresas como a las oportunidades de trabajo de los españoles. Y probablemente ni siquiera consiga mejorar en el largo plazo la recaudación».

Añadió que aumentar la presión fiscal es «exactamente lo contrario

a lo que están haciendo el resto de países europeos y lo contrario a lo que debemos hacer para favorecer la recuperación».

Preocupación en la logística

En clave nacional, uno de los sectores especialmente alarmados es el de la logística. Superada la vorágine del confinamiento, muchas de sus empre-

sas se han metido de lleno en el proceso de digitalización y han acometido nuevas inversiones. Por eso, la posibilidad de una nueva vuelta de tuerca impositiva ha caído como un auténtico jarro de agua fría. Francisco Aranda, presidente de UNO, la patronal del sector, se muestra tajante: «Es enormemente inoportuna, no logrará el objetivo de aumentar la re-

caudación y puede suponer una losa para reactivar nuestro deprimido mercado de trabajo». Aranda entiende la fiscalidad como una palanca para que el país vuelva a ponerse en marcha. «No puede ser solo un mecanismo de recaudación y debe convertirse en una política que fomente la actividad económica. Solo así tendrá garantizada una alta recaudación», remarca. Además, se muestra especialmente preocupado por el compromiso adquirido por el Gobierno en Bruselas para introducir el pago por uso de las carreteras de alta intensidad para ayudar así a su financiación.

El plan presentado por el Gobierno no ofrece detalles sobre la cuantía ni su plazo, pero ha levantado una fuerte polvareda en el sector logístico. «Es fundamental que en ningún caso se aplique a los profesionales del transporte, para los que las carreteras son espacios de trabajo necesario», dice Francisco Aranda.